



Revista Opera

ISSN: 1657-8651

opera@uexternado.edu.co

Universidad Externado de Colombia
Colombia

Duro, Rosa
Plan Colombia o la paz narcótica
Revista Opera, vol. 2, núm. 2, noviembre, 2002, pp. 87-116
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500206>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

PLAN COLOMBIA O LA PAZ NARCÓTICA

ROSA DURO*

“Ninguna guerra es una guerra hasta que un hermano mata a otro hermano”

*Kusturira, Emir,
1995, Película Underground, Sarajevo.*

1. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de la lucha antidrogas del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se puso en marcha, en diciembre de 1.999, un sugestivo programa denominado Plan Colombia, concebido como “un plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”.

La presencia de cultivos ilícitos en Colombia ha sido determinante en el desenvolvimiento de sus procesos políticos, sociales y económicos. Obliga a evaluar e implementar políticas tendientes a su erradicación, dadas las enormes proporciones en que el fenómeno incide desde lo nacional hacia lo internacional y viceversa.

Dada la multiplicidad de posiciones

y posibilidades de solución, además de la ilegalidad de tales cultivos, se quiere abordar el tema desde la perspectiva de su erradicación. En ella confluyen tanto las dinámicas de consumo y producción, como el marco económico que influye en la incorporación de unas políticas nacionales, en un contexto de naturaleza internacional y especialmente desde la posición del llamado Consenso de Washington.

La política antidrogas de mediados de los años noventa, denominada “Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de las Drogas”, se propuso “enfrentar y reducir sistemáticamente las causas y manifestaciones del problema de las drogas ilegales, mediante la aplicación de mecanismos de participación comunitaria que vinculen a la sociedad civil en la solución de dicha problemática” (Dirección Nacional de Estupefacientes, 1995).

Para alcanzar los objetivos de dicha política, se plantearon estrategias dirigidas al fortalecimiento de la justicia, cuyos

* Investigadora de OPERA y profesora de Ciencia Política y Análisis de Política Internacional, en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este artículo contó con la colaboración de Francisco Díaz Toledo, profesor de Introducción a la Economía y Economía Internacional de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

instrumentos fueron represión y sometimiento; cambios sustanciales en la administración de la justicia; control e interdicción, compuesto por la erradicación de cultivos ilícitos, la producción industrial de drogas, la distribución, el lavado de activos y la persecución de los carteles. Además, se propuso el desarrollo alternativo, entendido como el “Plan de Desarrollo Alternativo”, la reducción del consumo mediante prevención, rehabilitación y reinserción social, y la cooperación internacional como línea de acción de la responsabilidad internacional.

En particular, el documento buscaba centrar el proceso de investigación y evaluación en el ámbito de la erradicación de cultivos ilícitos, dado que Colombia era y sigue siendo el país de América Latina que más los produce y, por lo tanto, requiere más recursos económicos y políticos para reducirlos. Esta visión concebía la producción como eje de la política de represión, dado que se consideraba la única opción para su abolición, control y única alternativa para el desarrollo del país.

La política antidrogas tenía diferentes estrategias, cada una con sus respectivos instrumentos, pues su evaluación se limitaba al fracaso o a los logros en la dinámica de la producción y bajo sus efectos directos, referidos a la erradicación de los cultivos ilícitos y al “Plan de Desarrollo Alternativo”.

La evaluación de este proceso presentaba serias limitaciones. Existía una gran dificultad en los instrumentos de cuanti-

ficación desde los objetivos a delimitar, es decir desde los éxitos y los fracasos de la misma política de erradicación, así como desde los recursos que le son destinados, impidiendo así, la evaluación de la eficiencia de tal política. Otra limitación estaba en los efectos directos y únicos que aparecen desde la dinámica de producción. Se partía del supuesto de que la cantidad de hectáreas fumigadas era directamente proporcional a la disminución de la oferta final. En realidad sucedía lo contrario: había reubicación masiva de cultivos.

La política antidrogas no ofreció los resultados esperados en términos de reducción de la oferta e implementación de estrategias e instrumentos, puesto que el gobierno colombiano mantuvo estática la visión sobre la resolución del problema.

La Colombia del nuevo siglo enfrenta graves retos políticos, económicos y sociales. Los fenómenos que configuran la actualidad nacional más dramática (conflicto armado, crisis económica, narcotráfico, violación de los derechos humanos, migraciones ilegales, corrupción), despiertan cada vez mayor interés en una Comunidad Internacional que, liderada por Estados Unidos, coincide en afirmar que la situación del país pone en riesgo la estabilidad regional y mundial. La solución de los problemas que aquejan al país desbordará las fronteras domésticas para involucrar con mayor intensidad a los distintos actores del sistema mundial que se sienten amenazados por ellos. Colombia tendrá que definir si esa creciente intervención en sus asuntos

internos le sirve para preservar sus intereses como Nación o sí, por el contrario, agudiza y profundiza una situación de por sí crítica.

Este artículo tiene como objetivo el análisis descriptivo e histórico de la percepción que sobre la situación colombiana tuvo la administración Pastrana, la evaluación de los programas ejecutados por la misma, centrándonos en el Plan Colombia y en el papel que en el diseño y en la puesta en marcha del mismo ha tenido la comunidad internacional, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, tratando de dilucidar si el Plan efectivamente es para Colombia o si detrás del mismo se esconden otras pretensiones. Finalmente, el artículo se cerrará con un acercamiento al lado humano de los problemas, haciendo un recorrido por los efectos que los pobladores del Putumayo han padecido, tras la fumigación, principal estrategia de este Plan.

2. PASTRANA Y LA RECURRENTE BÚSQUEDA DE LA PAZ

El 7 de agosto de 1998, el electo candidato de la “Alianza para el Cambio”, Andrés

Pastrana Arango, tomó posesión de su cargo como Presidente de Colombia. El nuevo mandatario heredó un país en graves dificultades, acosado por la peor crisis económica de los últimos 70 años¹ y por la agudización de un conflicto armado que, con más de 50 años de antigüedad, ha observado la proliferación y fortalecimiento de los actores ilegales en confrontación: las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, así como los paramilitares².

La democracia más antigua de América Latina se ha debilitado por falta de credibilidad en unas instituciones poco efectivas y rodeadas de escándalos de corrupción; a lo cual se debe añadir el efecto del narcotráfico, que irrumpió en la historia del país potenciando los graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales ya existentes, y se constituyó en un factor más de desestabilización³.

2.1. El “Cambio para Construir la Paz”

La campaña y el programa liderados por

1. Indicadores Económicos: Tasa de desempleo 1998: 16%, 55% de la población colombiana por debajo de la línea de la pobreza, caída del PIB a tasas inferiores al 1%, alta concentración del ingreso, con la desigualdad más elevada de América Latina, caída del índice de calidad de vida ICV. Fuente DANE <http://www.dane.gov.co>

2. Las siguientes cifras, reveladas por el Banco de datos de Derechos Humanos de CINEP, muestran las dimensiones del poder militar de los actores alzados en armas: a) Número de guerrilleros: FARC: de 18 a 20.000 hombres, ELN: 5.000 hombres, AUC: 10.000 hombres. b) Acciones: 30.000 homicidios al año, de los cuales 3.000 son responsables los alzados en armas, 3000 secuestrados, cerca de 2 millones de desplazados.

3. Colombia es el primer país productor de cocaína del mundo, para 1998 la extensión de los cultivos de coca superaban las 102.000 hectáreas, responsables de aproximadamente la producción de 500 toneladas de cocaína al año.

Pastrana tuvieron como objetivo central la pacificación del país. Ésta fue su bandera política y a ella se consagraron los esfuerzos de la administración. Entendiendo que la violencia dificultaba el desarrollo y que esto a su vez impedía la superación de la violencia, el gobierno Pastrana diseñó un plan que con el nombre de “Cambio para Construir la Paz”, aspiraba a construir un nuevo modelo de sociedad: una Colombia en paz. Para alcanzar esa meta, el plan giraba entorno a cinco grandes estrategias.

La primera de ellas, denominada “Hacia un Estado Participativo”, hacía referencia al fortalecimiento de la democracia participativa como punto central en la búsqueda de la prosperidad, la equidad y la paz. Para ello planteaba reformas que garantizaran la gobernabilidad del Estado, a través de la modernización y la racionalización de la administración pública, caracterizada por la falta de eficiencia en la prestación de servicios y el mal uso de los recursos públicos, lo cual propiciaba un aumento en el déficit fiscal, altos índices de corrupción y crisis de credibilidad de las instituciones. El plan de desarrollo preveía dos reformas claves: la reducción del gasto público y el avance en el proceso de descentralización para acercar el servicio del Estado al ciudadano y hacerlo más eficaz.

La segunda estrategia, conocida como “Reconstitución del Tejido Social”, pretendía consolidar y fortalecer la sociedad civil, entendiéndola como pluralidad. De acuerdo con esta estrategia, la falta de co-

hesión social, en cuyo origen está la violencia, impide esa cohesión. El Estado se comprometía en la búsqueda de generar empleo, erradicar la pobreza y propiciar igualdad de oportunidades, mediante una distribución del ingreso equitativa y el respeto a los derechos humanos. Con estos objetivos el plan diseñó dos políticas: la primera, fortalecer el capital humano, asegurando la cobertura total en los servicios de salud y educación; la segunda, fortalecer el capital social, a través de alianzas estratégicas que generaran proyectos productivos participativos en tres niveles: sector agropecuario, desarrollo alternativo y acción estatal en las zonas afectadas por el conflicto. Se entendía que el diseño y ejecución de estos proyectos contaría con la participación de las comunidades.

La tercera estrategia, “Desarrollo y Paz”, partía del postulado según el cual la paz resultaba ser una condición indispensable para asegurar la sostenibilidad del desarrollo; a su vez, estimaba que el desarrollo era el arma más poderosa para iniciar la construcción de la paz. Todo el plan de desarrollo giraba en torno a la búsqueda de la paz, de condiciones para una negociación directa con los actores armados, para lo cual se le otorgaron al Presidente competencias especiales que le permitían negociar, suscribir y ejecutar acuerdos de paz, y promover la reinserción a la vida civil de los miembros de los grupos armados. Se reconocía que la paz no solo dependía de las negociaciones, sino de la superación de todas las formas de violencia que tienen su

origen en la exclusión económica y política de gran parte de la sociedad colombiana, en la existencia de una democracia elitista y poco participativa y en la desigualdad en la distribución del ingreso, que generaba altas tasas de pobreza.

Esta estrategia cobijaba políticas de desarrollo económico y social, que pretendían superar esos desequilibrios. Entre ellas se destacaban el desarrollo del sector agropecuario, ya que el campo era considerado indispensable en la construcción de la paz, por tener la confrontación armada un carácter fundamentalmente rural y ser la población campesina la más afectada por el conflicto. Así, se planteó la promoción de proyectos productivos, sostenibles y competitivos, capaces de asegurar rentas a las poblaciones campesinas tras la sustitución de los cultivos ilícitos.

Otro eje de la estrategia era el medio ambiente. Siendo Colombia uno de los países de mayor biodiversidad del planeta, albergando el 10% de la riqueza biológica mundial, se proponía una gestión clara y sostenible de estos recursos. La gestión ambiental estaría destinada a restaurar, renovar y fortalecer el patrimonio ambiental, teniendo en cuenta su carácter colectivo y con el fin de generar desarrollo.

Especial mención en esta estrategia de desarrollo y paz se hizo de las zonas más afectadas por el conflicto. Allí se planteó la programación de planes de inversión productiva y de infraestructura, además de ayuda humanitaria para contrarrestar los efectos que la violencia y el narcotráfico

generan en estas regiones. Por último, se mencionaba la necesidad de fortalecer el estado de derecho, restableciendo la justicia y recuperando la seguridad, lo cual dependía en gran medida de que las fuerzas armadas recuperaran el monopolio de las armas del que actualmente no gozan. El Estado se comprometía a que sus fuerzas de seguridad respetarán los derechos humanos.

La cuarta estrategia, “Exportaciones como Motor de Desarrollo”, hacía referencia al desalentador escenario económico del país. Índices de crecimiento inferiores al 5% del PIB, déficit en las balanzas de pagos y corriente y altas tasas de desempleo hacían necesaria la búsqueda de nuevas alternativas. Entre ellas se destacaba la profundización en la internacionalización de la economía colombiana que, aunque antigua, no tenía continuidad. Se considera al sector exportador como el líder de la economía colombiana, por su potencial para generar empleo y crecimiento económico y la posibilidad de sanear los índices macroeconómicos. Por este motivo, el “Cambio para Construir la Paz” consideraba las exportaciones como un motor para el crecimiento económico y buscaba crear un entorno favorable para incrementar la productividad y orientarla a cubrir la demanda externa. La recuperación de la estabilidad económica era una prioridad del plan, con la posibilidad de dinamizar la inversión privada, sobre todo la extranjera.

La quinta y última estrategia, “Forta-

lecimiento de la Infraestructura Social”, reconocía la responsabilidad estatal en la inadecuada provisión de infraestructura urbana y rural, para lo cual proponía dos políticas fundamentales destinadas a superar estas carencias: por un lado, en materia de vivienda y, por otro, en lo relacionado con la temática de agua potable y saneamiento, lo cual permitiría mejorar los índices de calidad de vida de muchos colombianos.

Todas estas estrategias se encaminaban a buscar la paz, mediante una salida negociada al conflicto político armado más antiguo del continente.

2.2. ¿Colombia en Paz? : Historia del Proceso

Los intentos de pacificar el país no son nuevos. Más de veinte años de acercamientos entre los distintos gobiernos y agrupaciones guerrilleras han tenido lugar desde principios de los años ochenta sin que se hayan conocido avances sustantivos. De hecho, la confrontación no sólo persiste sino que se ha intensificado en los últimos años. Un breve recorrido histórico por las experiencias en torno a la paz así lo pone de manifiesto.

El conflicto armado en Colombia cumple ya más de 50 años. En su desarrollo se distinguen tres grandes etapas. Se inicia con los cruentos enfrentamientos bipartidistas que caracterizaron la “Época de la Violencia” entre 1948 y 1957, continua con el surgimiento y consolidación

de los movimientos insurgentes a partir de los años sesenta y, finalmente, desde principios de la década de los ochenta, se caracteriza por la búsqueda de acercamientos, diálogos y negociaciones entre los gobiernos y las distintas organizaciones alzadas en armas, cuyo objetivo es el logro de la paz.

En el surgimiento de las guerrillas se distinguen dos grandes momentos. Por un lado, se debe mencionar una primera generación, liderada por las FARC, que desde 1964 aglutinó las autodefensas campesinas liberales, que se centraron en el problema de la tenencia de la tierra. Las FARC, de clara orientación comunista, constituyen la guerrilla más sólida y antigua del país. El ELN nació en 1965 como experiencia cercana a la revolución cubana, mientras que el Ejército Popular de Liberación -EPL-, de tendencia maoísta, vio la luz en 1967. Una segunda generación de estos movimientos la constituyen los grupos formados en el período entre 1975 y 1985, que surgen al calor de los procesos vividos en Centroamérica, entre los que están el M-19, experiencia pionera en guerrilla urbana, y el movimiento armado Quintín Lame, de origen indígena.

Un actor cada vez más importante del conflicto lo constituyen los grupos paramilitares que, surgidos desde los años sesenta para evitar grandes transformaciones sociales, se convirtieron, desde 1985, en el brazo armado de los narcotraficantes colombianos. Desde 1997 se agruparon en las Autodefensas Unidas de Colombia

AUC-, y su principal objetivo se constituye en la lucha contrainsurgente (Le Monde Diplomatique, septiembre de 2002).

Las primeras aproximaciones a la paz se presentaron durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), administración que entronizó las conversaciones con el M-19, con motivo de la toma de la embajada de República Dominicana, en 1980, por parte de este grupo guerrillero. Resultado: hacer de la paz una búsqueda recurrente. Sin embargo, la iniciativa de negociar en medio del conflicto no hizo más que agudizarlo e intensificarlo. La expedición del estatuto de seguridad, la vigencia del estado de sitio, la militarización de la vida civil y las continuas violaciones de los derechos humanos caracterizaron a esta administración. La paz fue el primer tema de campaña de los candidatos a la Presidencia en 1982 (Villamizar, 2002).

El elegido presidente para el período 1982-1986, Belisario Betancur, inició su mandato reconociendo la existencia de causas objetivas y subjetivas de la violencia y, en última instancia, del surgimiento de la insurgencia. Betancur se propuso alcanzar la paz por medio del diálogo, para lo cual proponía un proyecto de amnistía y la creación del Plan Nacional de Rehabilitación -PNR-. El proceso de paz que tuvo lugar durante su administración, se caracterizó por un agudo enfrentamiento militar con los grupos alzados en armas y por el fortalecimiento del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio. Se lograron

acercamientos con el M-19 (el presidente se reunió con los líderes de este movimiento); y en 1984 se dio un primer acuerdo con las FARC, que en 11 puntos proponía el cese al fuego y la creación de un movimiento político. Además, con el M-19 y el EPL se logró otro acuerdo en el mismo año. De esta manera, parte de los grupos guerrilleros lograron la posibilidad de acceder al espacio político. Este proceso también sufrió numerosas crisis, pues careció del apoyo necesario del partido de gobierno, y del beneplácito de las fuerzas armadas y de los gremios económicos. Finalmente, la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, dio al traste con la posibilidad de consolidar los acuerdos firmados.

El Presidente Virgilio Barco, entre 1986 y 1990, partió de las experiencias anteriores y fortaleció el PNR. Su política de “Mano Tendida y Pulso Firme” y la “Iniciativa por la Paz”, donde se fijaban criterios para los diálogos con las guerrillas, volvieron a poner en primera plana la pacificación del país como tema de interés nacional. El gobierno Barco comenzó diálogos con el M-19 en medio de una ofensiva narcoterrorista marcada por masacres, secuestros, homicidios, aumento de las acciones de la guerrilla, en fin, un clima de violencia sin precedentes. En 1989, y tras un año de negociaciones, se llegó a la desmovilización de ese grupo guerrillero y la posterior reincorporación de sus combatientes a la vida civil.

Con el Presidente César Gaviria se suscribió una nueva Constitución Política, en

1991. El nuevo mandatario heredó de Barco la “Iniciativa por la Paz” que sirvió de marco para el desarrollo del proceso de acercamiento, diálogos, negociaciones y firma de acuerdos con la insurgencia entre 1989-1994. A la desmovilización anterior del M-19 le siguieron las del EPL, el Quintín Lame y otros grupos más pequeños.

Gaviria entabló conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB- que agrupaba al EPL, al ELN y las FARC, en 1991 en Caracas y en 1992 en Tlaxcala; estos acercamientos no prosperaron, ya que de nuevo se desarrollaron en medio del conflicto. Desde mediados de 1992 se intensificó la guerra, a pesar de que Gaviria logró la desmovilización de varios grupos insurgentes, lo que significó la reinserción de 6 mil combatientes. Estos triunfos, considerados como modestos, no lograron impedir la profundización del conflicto político armado en Colombia (García, 2000).

Con la llegada al poder del liberal Ernesto Samper, en 1994, se anunció una política de “Paz Integral y Diálogo Útil”, cuyo objetivo fue superar el estrecho marco al que se había circunscrito la política de paz, centrándose en la desmovilización y la reinserción de los insurgentes. Samper reconoció el carácter político del conflicto y, asimismo, le otorgó este estatus a las distintas agrupaciones guerrilleras. Volvió a triunfar la iniciativa de negociar en medio del conflicto, sin condiciones previas. A pesar de iniciar contactos con las guerrillas más importantes del país: -

FARC, ELN y EPL-, no se logró echar a andar un proceso de negociación; por el contrario, el conflicto se intensificó. La crisis política que atravesaba el país, por la falta de legitimidad de unas instituciones que se vieron infiltradas por dineros del narcotráfico, dejó sin posibilidades la búsqueda de nuevos acercamientos y diálogos. En su última etapa, el período presidencial de Samper vivió uno de sus peores momentos: arreció la guerra, aumentó la polarización política, se degradó la situación de derechos humanos y aumentó la guerra sucia (García Peña, 1999). El movimiento insurgente creció vertiginosamente, en particular las FARC y el ELN, que avanzaron en términos militares, incrementaron su pie de fuerza y asestaron duros golpes al ejército colombiano, como el de Las Delicias, Puerto Legízamo, en 1996. A su vez se produjo un incremento sin precedentes del fenómeno paramilitar en Colombia. En medio del conflicto y entre el fuego cruzado de los distintos actores armados, estuvo siempre la sociedad civil colombiana, principal afectada por la degradación de las hostilidades.

En este contexto se desarrolla la contienda electoral que en 1998 enfrentó a los candidatos Horacio Serpa, del liberalismo oficialista, y Andrés Pastrana, líder de la “Alianza para el Cambio”. Desde el primer momento de la campaña, Serpa reafirmó su apoyo a la paz. No obstante, tras la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo de 1998, que culminó con una apretada victoria del candidato liberal -supe-

rando a Pastrana por 34.000 votos-, el candidato de la “Alianza para el Cambio” se apropia del tema de la paz, bandera política de gran atractivo electoral (Díaz-Callejas, 1999).

Una semana antes del 21 de junio, fecha programada para la segunda vuelta electoral, un delegado personal de Andrés Pastrana, Víctor G. Ricardo, se reúne en las montañas de Colombia con el comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda, quien da el visto bueno a la iniciativa de Pastrana para comenzar diálogos que conducirían a las negociaciones de paz, desestimando la propuesta de Serpa, del que desconfiaba por haberse levantado de la mesa de Tlaxcala en 1992. El 21 de junio de 1998, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales arroja 6 millones de votos para Pastrana, y 5,6 millones para Serpa. Renacía la esperanza de una paz lejana en un país con 52 años de una violencia que ya había cobrado más de 500 mil muertos.

El primer paso del proceso de paz tuvo lugar días antes de la posesión presidencial. Pastrana, acepta crear una zona desmilitarizada como condición para iniciar los diálogos. El 9 de julio de 1998 se produce un hecho considerado histórico: la reunión entre el Presidente electo y Marulanda de la que cual surge el anuncio oficial del despeje de cinco municipios en los departamentos de Meta y Caquetá -Mesetas, Vista Hermosa, Macarena, La Uribe y San Vicente del Caguán- que con 42 mil kilómetros de extensión se constituyen en la base terri-

torial para el desarrollo de los diálogos.

Desde agosto de 1998 hasta diciembre de ese mismo año, los encuentros entre representantes del gobierno y las FARC giraron entorno a temas como el canje de soldados secuestrados por guerrilleros presos, el reconocimiento político de las FARC por parte del gobierno y el tratamiento del paramilitarismo dentro del proceso de paz. El último escollo: la salida de ocho militares del Batallón Cazadores situado en la zona de despeje el 21 de diciembre. Así se dio por cumplida la anunciada desmilitarización de los cinco municipios (DEPAZ, 1998).

El 7 de enero de 1999 tuvo lugar la ceremonia inaugural de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC, prevista para instalar la mesa de diálogo por el Presidente de la República. A la ceremonia no asiste Marulanda, por “razones de seguridad”. En mayo de 1999, sin embargo, se da a conocer un acuerdo de 12 puntos denominado “Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia”, tras la segunda reunión entre Pastrana y “Tirofijo” (El Tiempo, 21 de enero, 2002). El documento propende por la solución política del conflicto armado, para lo cual se consideran numerosos aspectos, entre los que se encuentran la redistribución de la tierra, la protección del medio ambiente, la revisión del modelo de desarrollo, las reformas judiciales y del estado, el respeto al derecho internacional humanitario, la reforma de las fuerzas militares, la lucha contra el paramilitaris-

mo, las relaciones internacionales, la deuda externa y el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue. A final del 1999 se establece en Los Pozos la sede principal de los diálogos.

Luego de un tortuoso camino, finalmente, el 20 de febrero de 2002, el gobierno da por terminado el proceso de paz con las FARC, tras el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. Así, desde el 21 de febrero comienza la recuperación de la zona de distensión por las fuerzas armadas colombianas (Observatorio para los derechos humanos en Colombia, <http://www.rdh.gov.co>).

2.3. La Diplomacia para la Paz

La prioridad que la administración Andrés Pastrana le había otorgado a la pacificación del país en la agenda doméstica, a través de la salida negociada al conflicto armado, también impregnó la agenda externa colombiana (Carvajal, 2000). La internacionalización de la paz se constituiría en el gran reto de la política exterior de Colombia, basada en la defensa de los intereses nacionales.

En la era de la globalización, la interrelación entre los problemas internos y los mundiales es cada vez más importante. En el caso de Colombia, gran parte de los fenómenos que se producen en el país preocupan a la comunidad internacional por su potencial destabilizador: conflicto interno,

graves problemas económicos, narcotráfico, migraciones y movimientos masivos de población, violación de los derechos humanos, deterioro del medio ambiente, entre otros.

Desde esta perspectiva, y debido al convencimiento de que la paz solucionaría los graves problemas del país que competen al mundo, el nuevo mandatario y su equipo se lanzaron a una aventura exterior en búsqueda de apoyos para el incipiente proceso de paz, pues reconocían la incapacidad del sistema político colombiano para resolverlos (Presidencia de la República, 1999) ⁴.

La “Diplomacia para la Paz”, de la cual se encargó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se proponía lograr apoyo político y económico, encaminado a la construcción de un país en paz, dando prioridad a la recuperación económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto armado. El respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz colombiano debía respetar el principio de no intervención. Esta estrategia se centraba en la cooperación económica y técnica para buscar alternativas a los cultivos ilícitos desde la perspectiva de la corresponsabilidad internacional en la lucha contra el narcotráfico -países productores y consumidores-, dándole a la paz un contenido social y económico.

Con esa meta, la política exterior colombiana buscaba normalizar las relaciones con los Estados Unidos y diversificar

4. Para mayor información sobre la “Diplomacia para la Paz”, consultar <http://www.minrelext.gov.co>

los vínculos internacionales a distintos niveles: diálogo político, relaciones comerciales, de inversión y de cooperación. Especialmente, se señalaba la necesidad de fortalecer los lazos con los países vecinos y fronterizos de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, por ser un espacio natural de integración para Colombia; y con Europa, región considerada clave en la actual coyuntura del país, por su experiencia histórica en materia de desarrollo y solución de conflictos.

3. ESTADOS UNIDOS Y EL PLAN COLOMBIA

Muy pocos días después de su posesión, Andrés Pastrana anuncia el comienzo de una nueva era en las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, que durante el gobierno anterior habían estado heridas de muerte. La acusación contra la recién finalizada administración liberal, de haber recibido en su campaña electoral apoyo financiero de los carteles del narcotráfico, traumatizó durante todo el cuatrienio unas relaciones históricas, en las que Estados Unidos había considerado tradicionalmente a Colombia como el “más leal y fiel amigo en el continente”, por una alineación y subordinación irrefragable de Colombia al polo del norte bajo la doctrina *res pice polum* (Tickner, 2002).

“La guerra contra las drogas”, declarada desde mediados de los ochenta por la administración Reagan, representaba una prioridad de la política norteameri-

cana, por considerar este fenómeno una amenaza a la seguridad nacional del coloso del norte, y por tanto, del mundo. A pesar de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -JIFE-, con sede en Viena y perteneciente al sistema de Naciones Unidas, había declarado su satisfacción por la intensidad que en Colombia cobró la lucha antinarcóticos durante el gobierno Samper -en la que se erradicaron 30.000 hectáreas de coca, destruyeron 573 laboratorios y se incautaron más de 5,5 billones de dosis de cocaína-, la entonces administración Clinton decidió no certificar al país en 1996 y 1997.

El mecanismo unilateral de la certificación es aplicado por los Estados Unidos para calificar el desempeño de los países en la lucha contra el narcotráfico (Díaz-Callejas, 1997). La no certificación conlleva sanciones económicas, suspensión de ayudas, veto al otorgamiento de créditos por la banca multilateral, eliminación de cuotas de exportación y suspensión de tratamientos preferenciales al comercio, entre otros aspectos. Las consecuencias económicas afectaron gravemente las exportaciones del país, por la pérdida de ventajas arancelarias. Desde una perspectiva política, Colombia pasó a ser considerado un país “paria” o “problema” en el sistema internacional, si se consideraban la repercusión de sus problemas internos sobre la región.

Es descontento de Estados Unidos frente al accionar del gobierno colombiano, constituyen el contexto de política en el que Pastrana lanza su propuesta de paz.

3.1. Colombia: “Amiga Fiel”

La prioridad de la política exterior de la nueva administración fue, entonces, restaurar las relaciones con el país del norte. Estados Unidos es el principal interlocutor de Colombia en la comunidad internacional y su primer socio comercial -Colombia es proveedor estratégico de EEUU de café, petróleo, carbón y flores-. Después de México, Brasil y Venezuela, Colombia es el cuarto destinatario de las exportaciones norteamericanas a la región. Asimismo, Estados Unidos se constituye en el primer inversionista del país en los sectores de hidrocarburos, automotores, telecomunicaciones y financiero⁵.

La visita del nuevo mandatario, Andrés Pastrana, a su homólogo estadounidense, Bill Clinton, el 3 de agosto de 1998, antes de posesionarse como Presidente de los colombianos, puso de manifiesto el interés de normalizar las maltrechas relaciones. La percepción, que desde Estados Unidos se tenía de la administración Pastrana, como “amiga”, significaría un giro radical en las relaciones bilaterales entre Colombia y el país norteamericano. Para comenzar, Pastrana dio prioridad en su política exterior a la solución de los mayores problemas del país y en sintonía con sus intereses nacionales: la búsqueda de la paz y las relaciones comerciales. Criticó el peso que el tema de las drogas había ad-

quirido en la agenda bilateral desde mediados de los años ochenta.

El Plan Colombia, presentado a mediados de 1998 por el Presidente Pastrana como un *Plan Marshall*, paquete de ayuda social y económica para las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado colombiano, dependería de la contribución de la comunidad internacional. Estados Unidos se mostró interesado en la paz de Colombia, ya que de ella dependía, en gran parte, la estabilidad económica y política del país, necesaria para minimizar el riesgo de las inversiones norteamericanas. Clinton dio todo el apoyo político a Pastrana, olvidando el tema del narcotráfico y el aumento en los cultivos de coca y amapola.

El interés de involucrar activamente a Estados Unidos en el incipiente proceso de paz tropezó, sin embargo, con graves obstáculos. A pesar de los esfuerzos de Pastrana para tratar de distinguir entre las expresiones internas del conflicto colombiano y los problemas internacionales centrados en el narcotráfico (Tickner, 2001), varios hechos sirvieron de excusa para negarle el visto bueno a un “Plan” que muchos norteamericanos consideraban utópico: el proceso de paz con las FARC empezó a tambalear a mediados del 1999, cuando apenas había comenzado. Los militares colombianos manifestaron su inconformidad con un proceso en

5. Para más información sobre estadísticas de comercio en Colombia, ver: <http://www.comunidadandina.org/estadisticas>.

el que consideraban que el Estado colombiano hacía demasiadas concesiones a las FARC, sin obtener contrapartidas tangibles. Por otro lado, la guerrilla incrementó su ofensiva y, por último, la gota que colmó el vaso: tres indigenistas norteamericanos fueron asesinados por las FARC en Arauca (Isacson, 2001).

El cambio de posición norteamericana respecto al conflicto colombiano fue evidente. Desde finales del año 1999, desfilaron por el país los más altos funcionarios de la administración Clinton: la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Pickering y el entonces Zar Antidrogas, Barry McCaffrey. Todos presagiaron un cambio de percepción sobre la situación del país y, por tanto, otro viraje en el enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Revivieron los apelativos de “narcoguerrilla” y “terroristas”⁶ para referirse a las FARC, y se empezó a condicionar la ayuda a Colombia y al incipiente proceso de paz, a la lucha frontal contra el narcotráfico. De nuevo las relaciones bilaterales se “narcotizaron” y la paz pasó a un segundo plano. Primaron los intereses norteamericanos en el rediseño de un plan, cuyo principal objetivo era la guerra contra las drogas, estrechando los lazos militares para asegurar la estabilidad democrática y el libre mercado en la región.

3.2. Plan Colombia: Del Plan de Desarrollo al Antinarcóticos

Para Estados Unidos, el narcotráfico se ha convertido en una nueva amenaza contra el orden mundial, llamado a sustituir al ya moribundo fantasma del comunismo. Desde los años ochenta, la guerra mundial contra las drogas ha sido una prioridad en la política norteamericana, que considera el fenómeno como una amenaza directa a su seguridad nacional, percepción que contamina su agenda internacional. Clinton recuperó este discurso en 1999, coincidiendo con los resultados arrojados por encuestas realizadas en Estados Unidos, que expresaban el deseo del pueblo norteamericano de fortalecer la guerra contra las drogas en los países productores y no en su territorio (Borrero, 2000). Y Colombia era el primer productor de cocaína en el mundo, responsable del 80% de la producción total estimada en 520 toneladas al año.

Estados Unidos se considera gravemente afectado por el aumento en la producción colombiana de sustancias narcóticas. Esto lo confirman las declaraciones de Barry McCaffrey:

...las drogas ilícitas le cuestan cada año a la sociedad norteamericana 110.000 millones de dólares, por gastos médicos, accidentes y pérdida de productividad. Si no les prestamos atención a los

6. En 1997 el Departamento de Estado norteamericano incluyó a las FARC en la lista de grupos terroristas.

cultivos y a su rápida expansión, amenazarán con aumentar de manera significativa la oferta global de cocaína y heroína. Sin programas efectivos de reducción de la oferta, no habrá éxitos en nuestros esfuerzos por reducir la demanda. En Colombia, terroristas financiados por los narcóticos secuestran y matan a ciudadanos norteamericanos y atacan y extorsionan a las empresas estadounidenses que tienen sus negocios allí (McCaffrey, 2000).

En Estados Unidos se percibe a Colombia como un país en crisis, que se ha convertido en fuente y zona de tránsito de aproximadamente el 80% de la cocaína que se consume en el país del norte. Los cultivos ilícitos se incrementaron en los últimos años. El área cultivada de coca llegó a 110.000 hectáreas en 1998 y a 6.000 la de amapola, que satisface el 50% de la demanda norteamericana de heroína.

Se entiende la reducción de la oferta de narcóticos como condición indispensable para la paz y la estabilidad democrática en la región andina. Además se reconoce la relación cada vez más estrecha entre el negocio del narcotráfico y el conflicto armado colombiano⁷. Los grupos alzados en armas (guerrillas y paramilitares) se financian del narcotráfico. Ellos controlan las zonas de los llamados “cultivos ilícitos”, hoy fuera del control del Estado colombiano. Se estima que la

participación de la guerrilla en la economía del narcotráfico supera los 500 millones de dólares al año.

Con todos estos condicionantes, un nuevo Plan Colombia empieza a circular en octubre de 1999. El gobierno de Andrés Pastrana presenta al gobierno de los Estados Unidos el llamado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”⁸. La nueva versión achaca todos los males de Colombia -conflicto armado, grave situación económica- al problema del narcotráfico; por tanto, la solución de los mismos se ve condicionada a una lucha frontal contra este flagelo.

Con base en este diagnóstico, el Plan se fundamentó en cuatro componentes: recuperación económica y social, proceso de negociación del conflicto armado, estrategia antinarcóticos, y fortalecimiento institucional y desarrollo social. El componente antinarcóticos fue priorizado, pues bajo tales consideraciones, el problema de las drogas es considerado como obstáculo principal para alcanzar la paz en el país. La meta del gobierno colombiano para los seis años siguientes a 1999, sería reducir a la mitad el cultivo, procesamiento y distribución de droga en el país. Para ello, se trazaron estrategias de erradicación forzosa, como la fumigación, al lado de proyectos de sustitución de cultivos y desarrollo al-

7. Al respecto se puede consultar el documento con la sustentación que el Presidente Clinton hace del “Plan Colombia” ante el Congreso de los EEUU, el 11 de enero del 2000.

8. Para más información sobre el Plan Colombia, consultar <http://www.dnp.gov.co>.

ternativo en las áreas afectadas, así como del control de actividades ligadas al tráfico de estupefacientes: lavado de activos, comercio de precursores químicos utilizados en el procesamiento de la pasta de coca y control de consumo, con políticas destinadas a reducir la demanda mediante campañas de educación y prevención.

La puesta en marcha de este ambicioso Plan tendría un costo aproximado de 7.500 millones de dólares, de los cuales el país aportaría 4000 mil millones; los 3.500 millones restantes, se esperaba que procedieran de la comunidad internacional. Colombia ha gestionado con las entidades crediticias internacionales -Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo- créditos por 5.700 millones para financiar su parte del Plan.

Con el fin de canalizar los diferentes aportes a los proyectos y programas propuestos, el gobierno crea el Fondo de Inversión para la Paz -FIP- adscrito a la Presidencia de la República, cuya función central ha sido la de agilizar y garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos. El gobierno colombiano solicita, además, la cooperación internacional en la consecución de los recursos necesarios para la puesta en marcha de este plan antinarcóticos.

Según distintas fuentes, el Plan Colombia fue dado a conocer en su primera versión en inglés (<http://www.ciponline.org>). En octubre de 1999, los senadores norteamericanos Dewine, Grassley y Cordewell

presentaron en la sesión 106 del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano el Proyecto de Ley S1758, que con el nombre de “Alianza Act”, solicita una ayuda adicional de 1500 millones de dólares para financiar el Plan Colombia (Desde Abajo, 1999).

El 29 de marzo del 2000, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba una ayuda de 1.318 millones de dólares para los años 2000 y 2001, destinada a financiar el Plan Colombia, aunque se estima que la presencia será al menos por los próximos cinco años. El 19 de junio del 2000 el Plan es aprobado por el Senado estadounidense y en julio de ese mismo año, el paquete de ayuda se convierte en ley. Se condiciona la ayuda al cumplimiento de las disposiciones que protegen los derechos humanos con la llamada enmienda Leahy. Finalmente, la visita del presidente Clinton a Cartagena, el 30 de agosto del 2000, da el espaldarazo definitivo a la puesta en marcha del Plan, que para el país del norte es un plan antinarcóticos.

Colombia recibe 860 millones de dólares; el resto se destina a la financiación de operaciones conjuntas y de frontera en los países vecinos de la región andina y al apoyo de un programa de inteligencia que tendrá un costo de 53 millones de dólares. A este monto hay que añadirle los 330 millones de dólares de ayuda planeada con anterioridad. Estas cifras elevan en un 800% la ayuda militar destinada a Colombia por parte de los Estados Unidos,

lo que ubica al país como el tercer receptor más importante del mundo después de Egipto e Israel.

Aunque desde Bogotá se insiste en que el Plan Colombia es en su integridad un 25% militar y un 75% económico y social, la contribución de Washington pone de manifiesto lo contrario. El 80% de los montos de la ayuda norteamericana se destina a modernizar y reestructurar las fuerzas armadas y de policía colombianas para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico. Se financian actividades centradas en la interdicción y en la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Los militares y policías colombianos reciben ayuda en inteligencia y logística (helicópteros, aviones de fumigación, satélites, visores nocturnos, etc.). La justificación para los Estados Unidos es, en palabras de Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur, que “las fuerzas colombianas son incapaces de responder a los desafíos del país” (Fernández, 1999). La ayuda norteamericana a Colombia sufrirá importantes transformaciones⁹. El 20% de la ayuda de Washington se destina al componente social del Plan Colombia, en el que se incluye: desarrollo alternativo, atención a desplazados, reforma del sistema judicial, protección a los derechos humanos y apo-

yo al proceso de paz.

La descripción detallada del apoyo norteamericano al Plan Colombia es la siguiente:¹⁰

- 416 millones de dólares para asistencia militar, que incluye apoyo a batallones antinarcóticos, entrenamiento y equipamiento, compra de Helicópteros UH-1N, Hueys y Blackhawk, protección de bases, inteligencia, y obras de infraestructura.
- 378 millones de dólares para apoyar medidas de interdicción, con la compra de nuevos radares, mejora de pistas de aterrizaje, adquisición de nuevas aeronaves y operaciones navales.
- La ayuda a la policía colombiana se expresa en 115 millones de dólares para financiar compra de armas, adquisición de helicópteros Blackhawks, construcción de bases antinarcóticos en las fronteras, aeronaves de fumigación, entrenamiento, actividades de erradicación, etc.
- Al desarrollo alternativo, con la financiación de programas ambientales y de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en el sur del país se destinarán 64 millones de dólares.
- Para apoyar programas de asistencia a

9. En 1996 el país recibió \$40 millones de dólares, en 1997 alcanzó la cifra de \$83 millones de dólares, para 1998 se incrementó a \$110 millones de dólares y en 1999 alcanza el record de \$ 294 millones de dólares.

10. Para más información sobre el Apoyo de EE.UU. al Plan Colombia, ver “Descripción del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia”. Departamento de Estado de Estados Unidos, programas de Información Internacional.

población desplazada, la ayuda es de 37 millones de dólares. El monto destinado a la protección de los derechos humanos, fortaleciendo instituciones encargadas de esta tarea, asciende a 51 millones de dólares. Para la reforma del sistema judicial colombiano se destinan 13 millones dólares. El apoyo al fortalecimiento del “Estado de Derecho” contará con 55 millones de dólares.

- Finalmente, como apoyo al proceso de paz, prioridad en la agenda de la administración Pastrana, se destinan 3 millones de dólares.

La primera fase del Plan Colombia se lleva a cabo en el sur del país (departamentos de Putumayo y Caquetá), por concentrarse en esta región la mayor extensión de cultivos de coca en Colombia, que para el año 2000 se estimaban entre 55.000 y 70.000 hectáreas, dependiendo de las fuentes consultadas.

La conocida “Ofensiva en el Sur de Colombia”, conocida en inglés como “*Push into the Southern*” tiene como objetivo primordial la erradicación de cultivos ilícitos a través de las fumigaciones aéreas, fortaleciendo la presencia militar y de policía del Estado colombiano en una zona controlada por las FARC, para proteger las misiones antinarcoóticos. Con ese fin se crea una nueva brigada antinarcoóticos, que con capacidad para 2.900 efectivos ya está operando; tres batallones han sido entrenados y capacitados por boinas verdes norteamericanos (Romero, 2001). Las fumigacio-

nes aéreas del Plan Colombia se iniciaron en diciembre del 2000 en el Putumayo; para esta tarea se contrató a la compañía privada norteamericana DynCorp, que será protegida por las fuerzas de seguridad colombianas en las tareas de aspersión.

Numerosos analistas aseguran que tras la cobertura de la lucha antinarcoóticos se estarían creando las condiciones para una participación norteamericana en la guerra contra la insurgencia guerrillera, como estrategia de recuperación territorial de una zona de enorme importancia geopolítica (petróleo, oro, fuentes de agua, biodiversidad).

3.3. IRA contra el terrorismo

El nuevo mandatario de los Estados Unidos, George W. Bush (2001-2005), mantuvo las políticas que para Colombia había diseñado su antecesor, Bill Clinton, y ofreció apoyo irrestricto a la continuación del Plan Colombia.

En abril del 2001, y durante dos días, tuvo lugar, en Québec, la Tercera Cumbre de las Américas, que convocó a los presidentes americanos en torno a problemas y retos comunes, entre ellos, el fortalecimiento de la democracia y la integración hemisférica. Bush aprovechó el evento para anunciar, con el nombre “Iniciativa Regional Andina” -IRA-, nuevas partidas de ayuda financiera y técnica a la zona, que tenían como objetivo contrarrestar las amenazas que sobre ella se ciernen y que ponen en peligro la estabi-

lidad del hemisferio occidental. La IRA, columna vertebral de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, se centra en cuatro aspectos básicos: defensa de la democracia, fomento del desarrollo económico, liberalización del comercio y lucha contra el narcotráfico¹¹. La nueva iniciativa adopta un enfoque regional en la guerra contra las drogas; aunque ya el Plan Colombia destinaba apoyo financiero y tecnológico para los países fronterizos de Colombia, esta propuesta contempla un aumento sustancial. La ayuda propuesta consiste en \$782 millones de dólares en asistencia para la región andina, durante el año fiscal 2002. Mantiene el apoyo a Colombia y refuerza el de los países vecinos, con el fin de prevenir el “desbordamiento” del conflicto colombiano y el resurgimiento de cultivos ilícitos (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2002).

Colombia recibe la mayor tajada del pastel en el nuevo paquete de ayuda, con un monto que asciende a \$380 millones de dólares. Le siguen Perú, con \$194 millones; Bolivia con \$122 millones y por último Ecuador, que participa con \$47 millones. El resto de la ayuda se destina a financiar operaciones de control en las fronteras con Venezuela, Brasil y Panamá.

Con los sucesos del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo vuelve prioritaria, tanto para la agenda de seguridad norteamericana como para el

mundo. El proceso de paz colombiano, en abierta crisis desde finales del 2001, será víctima de la guerra contra el terrorismo. Los grupos alzados en armas en Colombia forman parte de la lista de organizaciones terroristas internacionales que publica el Departamento de Estado. Se les considera una amenaza para Colombia y para la región. Con el rompimiento del proceso de paz, en febrero del 2002, se habla cada vez más abiertamente desde Colombia y desde los Estados Unidos de utilizar la ayuda norteamericana (hasta entonces comprometida en la lucha antinarcóticos) para combatir el terrorismo en Colombia.

El gobierno de Bush pide autorización al Congreso norteamericano para ampliar la ayuda a Colombia y para utilizar la infraestructura armada, brindada por Washington, en la lucha contrainsurgente (Serrano, 2002). Finalmente, el 17 de julio de 2002, el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras del Senado estadounidense aprueba la ayuda a Colombia para combatir a la insurgencia; los montos se elevan a los propuestos por Bush para la IRA. Colombia recibirá alrededor de \$550 millones de dólares, con los que se proyecta crear una nueva brigada antinarcóticos y entrenar a la Brigada XVIII de Arauca, a cargo de la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Estas contribuciones llegarían en 2003 (Gómez, 2002).

11. Para mayor detalle, consultar el documento “Política Norteamericana en los Andes”, publicado por la Embajada de EE UU en Colombia el 16 de mayo del 2001

4. EUROPA: “PLAN A LA CARTA”

La “Diplomacia para la Paz” ha tenido un sentido diferente en el viejo continente. Tras aprobarse el Plan Colombia, el gobierno colombiano enfocó sus esfuerzos diplomáticos con un claro objetivo: conseguir el respaldo político de Europa al paquete de ayuda norteamericano, demandando un compromiso de los quince en la financiación del llamado “componente social del plan”. Con esta meta, la versión que del Plan se presenta a los gobiernos europeos hace énfasis en el plano social y de fortalecimiento institucional, sin demasiadas referencias al uso militar de los recursos. Europa será convocada en calidad de donante para la cooperación (Vargas, 2001).

La Unión Europea -UE- mostró ambigüedad con respecto a la crisis colombiana, lo que de nuevo puso de manifiesto la incapacidad de Europa para hablar con una sola voz en el ámbito internacional. España, enfática defensora del plan¹², fue la anfitriona de la mesa de donantes celebrada en Madrid en julio del 2000, a la que asistieron 26 países y siete organizaciones internacionales. Colombia esperaba obtener 900 millones de dólares de los europeos, cifra que se vio reducida a los 100 millones de dólares aportados por España, más 20 millones de dólares do-

nados por Noruega, en apoyo al proceso de paz colombiano. Otros países se opusieron desde el principio a comprometerse en la financiación de un plan que consideraban militarista. Ello induciría un escalamiento del conflicto armado en Colombia, incompatible con el proceso de negociación política.

La oposición más radical al Plan la encarnaron Alemania, Bélgica y los países nórdicos. Ellos consideraban que la ejecución del plan, con fumigación masiva de cultivos ilícitos, provocaría un éxodo campesino sin precedentes (Pérez, 2000), agravando la ya delicada situación humanitaria por la que atravesaba el país. Hasta esos momentos Europa no había rechazado oficialmente el Plan, aunque se evidenciaba la inconformidad de que su aporte se entendiera como la parte correspondiente a la “zanahoria”, en contraste con el “garrote” que significaba el paquete militar norteamericano (Vargas (b), 2001). Europa se encuentra en una situación comprometida, ya que una mayor injerencia en los asuntos colombianos podría incomodar a su socio norteamericano, en un país que ha estado tradicionalmente bajo su influencia.

En febrero del 2001 el Parlamento Europeo aprueba una de las resoluciones más duras de su historia con respecto a la situación de un país latinoamericano (Roy,

12. España tiene grandes intereses en Colombia, desde 1997 es el primer inversionista en el país en los sectores petrolero, financiero e hidroeléctrico.

2001): la Resolución B5-0087/2001, referente al Plan Colombia y al apoyo al proceso de paz colombiano. La resolución reitera el firme apoyo de Europa al proceso de paz en este país; opina que el conflicto colombiano no es sólo de carácter armado sino que tiene grandes implicaciones sociales y políticas, cuyo trasfondo es la exclusión económica, política, social y cultural; y advierte que el Plan Colombia acarrea un mayor grado de militarización que pone en peligro los proyectos de cooperación y no podrá conducir a una paz duradera. Los europeos rechazan las campañas de fumigación con herbicidas químicos y ensayos con armas biológicas, por los problemas que generan al medio ambiente y a la salud humana.

A partir del año 2001 se evidencia en Europa un distanciamiento cada vez más claro del Plan Colombia. La UE aclara que su apoyo es al “proceso de paz”, y se desmarca del componente militar. Para ese fin, la UE invertirá en apoyo diplomático, político y en la financiación de proyectos de cooperación.

El apoyo diplomático a la salida negociada al conflicto colombiano se traduce en la presencia y protagonismo europeo en el grupo de los llamados “países amigos”, de los que hacen parte España, Francia, Italia y Suecia. Desde marzo del 2001 estas países son miembros de la comisión

facilitadora del proceso de paz instalada en “Los Pozos”.

Según la UE, la mejor forma de apoyar a la pacificación de Colombia es a través de la cooperación. En abril del 2001, la Comisión anuncia desde Bruselas, una partida de 366 millones de euros¹³ para apoyar el proceso de paz colombiano. Estos recursos serán destinados a financiar proyectos de fortalecimiento institucional (reforma de la justicia, administración, programas anticorrupción y contra la impunidad), programas de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos y programas de apoyo a la población desplazada y de derechos humanos¹⁴.

Desde febrero del 2002 se anuncia la puesta en marcha de un proyecto piloto en el Magdalena Medio que, con el nombre de “Laboratorios de Paz” y recursos por 35 millones de euros, que pretende hacer participar a los ciudadanos en el proceso de paz, reforzando las instituciones sociales y haciendo énfasis en el desarrollo sostenible.

Ante la ruptura del proceso de paz en febrero del 2002, la UE expresa que la única salida viable al conflicto colombiano sigue siendo la salida política negociada y que pondrá a disposición de este país sus esfuerzos políticos y diplomáticos en la consecución de la misma, cuando así se lo demande el gobierno colombiano. Sin

13. El valor del Euro, en agosto de 2002, correspondía a 2600 pesos colombianos

14. Para más información sobre el apoyo al proceso de paz colombiano de la UE, consultar <http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/>.

embargo, los europeos se muestran inconformes con reducir el problema de la paz a una política de gobierno y no de Estado. Así se evidenció en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la UE, celebrada en Madrid en mayo del 2002. El gobierno colombiano pidió allí incluir a las FARC en la lista europea de grupos terroristas, cuando dos años antes el mismo gobierno había insistido en que se le diera a este grupo un estatus político para avanzar en las negociaciones de paz.

Aunque la participación europea es bienvenida en Colombia y no se percibe como injerencia en los asuntos internos del país, los europeos no confían en las instituciones colombianas, de las que dicen no tienen capacidad para absorber y distribuir los fondos destinados a la cooperación. Desconfianza que también responde a los altos índices de corrupción de las instituciones. Hay en Colombia insatisfacción, ya que se considera que el apoyo europeo es insuficiente y que el acceso y la ejecución de los proyectos de cooperación es lenta y fragmentada. También se reivindica mayor acceso de los productos colombianos a los mercados europeos, como reconocimiento a los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico, pues actualmente sólo el 23% de las exportaciones se benefician del sistema de preferencias arancelarias SPG.

5. PUTUMAYO EN LA MIRA

La “Ofensiva al Sur de Colombia” (*Push into the Southern*), como primera fase del Plan Colombia, se focaliza en el departamento del Putumayo. No es gratuito que la primera fase de este ambicioso Plan se esté ejecutando allí. Esta apartada región del sur de Colombia concentra la mayor extensión de cultivos de coca del país y, por tanto, del mundo; según distintas fuentes consultadas, el área cultivada supera las 70 mil hectáreas¹⁵. Como si esto fuera poco, el Putumayo es además uno de los fortines más importantes del grupo insurgente más antiguo del hemisferio: las FARC.

5.1. Verde, el Putumayo

El departamento del Putumayo se ubica en el suroeste colombiano, región amazónica, y toma su nombre del río que baña la región, Izá, que en lengua indígena significa “río de la caña brava” y que se constituye en frontera natural entre Colombia y dos de sus vecinos: Perú y Ecuador. Con una extensión de 25.570 kilómetros cuadrados, la mayor parte de su territorio se localiza en el área de selva tropical, y se distinguen en él tres regiones naturales: Alto, Medio y Bajo Putumayo. La población, cifrada en 350 mil habitantes según el censo más reciente, está formada en su mayoría por colonos que, huyendo de la

15. Para más información sobre cultivos en el Putumayo, ver Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. Presidencia de la República de Colombia.

violencia y de los procesos de concentración de la tierra, han llegado a la región en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Entre los pobladores originales del Putumayo se encuentran 15 mil indígenas de diversos pueblos: Ingas, Kofanes, Sionas, Huitotos y Kamtsás, con un fuerte apego a la tierra. Esta región es una de las más afectadas por la violencia del país.

La historia de la región está muy asociada con bonanzas económicas que se suceden en la zona y condicionan el poblamiento a la aparición de nuevas actividades productivas, de extracción mineral fundamentalmente: oro, caucho, quina, petróleo y, desde 1979, los llamados “cultivos ilícitos”. La llegada de los “narcocultivos”, desplazados de Perú y Bolivia tras agresivas campañas de interdicción y erradicación forzosa, supondrá un punto de inflexión en el desarrollo político, económico, social y cultural de la región. Se estima que alrededor de 50 mil campesinos están dedicados al cultivo y procesamiento de la hoja de coca, que produce tres cosechas al año. El kilo de pasta de coca se cotiza hoy en \$ 1000 dólares, de los cuales los campesinos reciben apenas 0,67% de las ganancias. A pesar de tan irrisorio beneficio del lucrativo negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos siguen siendo más rentables que los tradicionales (Defensoría del Pueblo, 2001).

A pesar de toda esta explosión económica, el departamento sigue siendo tierra abandonada del Estado y olvidada de la inversión social. La ausencia de servicios públicos e infraestructura vial siguen caracterizando a esta reserva natural del país en la actualidad. La ausencia del Estado convierte a la zona en terreno abonado para la aparición de actores armados (guerrillas y paramilitares) que se disputan a sangre y fuego su dominio del área, y van tras el control de sus numerosos recursos (Echandía, 1999). Las FARC, hegemónicas en la región desde comienzos de los años ochenta, consideran al Putumayo como una de sus principales bases territoriales y sociales en el país. Según Manuel Alzate, alcalde de Puerto Asís; “en la zona operan el Frente 32, el Frente 48, el Frente 15, y aquí las FARC no se van a quedar quietas”¹⁶, asegura en previsión de la escalada del conflicto con la ejecución del Plan Colombia, al que las guerrillas tienen por plan de guerra. Desde 1997, el paramilitarismo reaparece con fuerza en la región creando bases en el Valle del Guamuez, La Hormiga, y Puerto Asís, importantes centros cocaleros del departamento, aumentando así las tasas de violencia de este pedazo de la Amazonía en Colombia. En 1999 hubo 13 masacres en la región que cobraron la vida de 77 personas. Según informes que sobre el Putu-

16. Apartes de la entrevista realizada por la autora del artículo al alcalde de Puerto Asís, Putumayo, Manuel Alzate. Septiembre 2000.

mayo publica la Presidencia de la República, “las tasas de homicidio en la región multiplican por cuatro la media nacional, situándose en 140 por cada 100.000 mil habitantes” (Vicepresidencia de la República de Colombia, <http://www.rdh.gov.co>). Los grupos armados ilegales con presencia en la zona se financian en parte con impuestos que cobran sobre la producción de la coca (impuestos al gramaje, cobro por la protección de cultivos a los narcotraficantes y comisiones a los intermediarios para la comercialización).

5.2. El Plan de Fumigación

La ejecución de la primera fase del Plan Colombia se expresó en el fortalecimiento de la presencia militar en la zona, con la creación de tres nuevos batallones antinarcóticos en el cercano departamento del Caquetá. Con una dotación de 3.000 mil hombres equipados con modernos equipos y entrenados por personal civil norteamericano, (firmas privadas de seguridad norteamericanas se encargan de estos menesteres) se lleva a cabo la “Ofensiva en el Sur de Colombia”, también conocida como la “Guerra del Sur”. Las bases de Larandia y Tres Esquinas entran en actividad. La misión de estos batallones consiste en hacer del Putumayo un lugar seguro para adelantar las campañas de fumigación, ya que la presencia de las FARC vuelve peligrosa esta tarea. Ya se han producido disparos contra las avionetas fumigadoras.

Las fumigaciones del Plan, principal

táctica para reducir los “cultivos ilícitos”, estuvieron destinadas a la erradicación de los “cultivos industriales”, con una extensión superior a las 4 hectáreas. Las campañas de aspersión se llevaron a cabo en el Putumayo entre el 22 de diciembre del año 2000 y el mes de marzo del 2001 con un resultado de más de 32 mil hectáreas fumigadas. Se empleó un dañino herbicida, Round-Up-Ultra, una mezcla de Glifosato y componentes como el Cosmo-flux y el Cosmo-IN-D, que permiten una mayor adherencia a la coca, aumentando su potencial destructor. El Round-Up-Ultra es comercializado por la multinacional norteamericana de la agroquímica Monsanto. En noviembre del 2001, se vuelve a fumigar la zona a pesar de los nefastos resultados obtenidos (Isacson, y Vaicius, 2001).

Las consecuencias de las fumigaciones no se han hecho esperar, a pesar de que el Estado se había comprometido a hacer un tratamiento diferenciado entre cultivos familiares e industriales, focalizando las fumigaciones en las áreas de mayor extensión de ilícitos. Las campañas indiscriminadas de erradicación forzosa han terminado afectando gravemente a los pequeños cultivadores (campesinos, colonos indígenas), cuya base de sustento es la coca.

A las ya escandalosas cifras de desplazados del país, que superan los 2 millones de personas, se suman ahora los desplazados del sur que, huyendo de la violencia y de las fumigaciones que esterilizan sus tierras por un buen número de años y enfer-

man a sus gentes, buscan refugio en las cabeceras municipales de Mocoa y Pitalito y en departamentos vecinos como Nariño. Aunque no existen datos fiables de las nuevas oleadas de desplazamiento, la cifra bordearía los 100 mil (CODHES, 2001). En previsión de la nueva oleada de desplazados colombianos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, construye un campamento de asistencia a desplazados en la provincia ecuatoriana de Sucumbios, frontera con Colombia que, con capacidad para 5.000 personas, ha visto desbordados los cálculos más pesimistas.

Los efectos del plan ya se sienten en el Ecuador. Sobre todo en las regiones fronterizas de Sucumbios, según Manuel Salgado, ex diputado de la provincia fronteriza de Carchi: “el comercio fronterizo se ha reducido en un 85%, asimismo tenemos noticias de la presencia de grupo armados colombianos en territorio ecuatoriano, al que incursionan en busca de avituallamiento, y ya se han producido casos de reclutamiento forzoso de ciudadanos ecuatorianos en las filas de los violentos”¹⁷. Asimismo, reconoce la destrucción de cultivos de pancoger, cultivos de alimentos, como consecuencia de las fumigaciones, que ha obligado a numerosos ecuatorianos a desplazarse hacia el interior del país. La base de Manta, ce-

dida por contrato de Ecuador a los Estados Unidos en noviembre de 1.999, para su utilización en asuntos antinarcóticos, ya está en pleno funcionamiento y 10 mil efectivos del ejército ecuatoriano han sido reubicados en la frontera norte del país con Colombia.

No obstante la defensa institucional de las fumigaciones, recientes estudios arrojan resultados nefastos. Según datos del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMC-, creado por el gobierno colombiano y la ONU y basados en un rastreo del servicio francés de fotografía satelital *Spottimage*¹⁸, el aumento del área cultivada es proporcional al área fumigada; y tras las campañas en Colombia, se ha observado un aumento en la extensión de cultivos en Perú y Bolivia, países donde el área cultivada se había reducido a la mitad en el último quinquenio. La falta de alternativas reales a la sustitución de cultivos mueve a los campesinos a desplazarse y a desplazar con ellos los “cultivos ilícitos” para mantener sus rentas.

5.3. Desarrollo Alternativo amenazado

En vísperas de las fumigaciones, el gobierno colombiano, a través del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -PLANTE- y dentro del componente social del Plan

17. Apartes de la entrevista realizada por la autora a Manuel Salgado, Bogotá, septiembre 2001.

18. *Spottimage*, es el Servicio Francés de Fotografía Satelital, que es la encargada de rastrear la extensión de las plantaciones de coca en Colombia.

Colombia, establece pactos de erradicación voluntaria con las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos. El desarrollo alternativo se entiende como complemento de la fumigación. Estos pactos están destinados a ayudar a las familias con cultivos de menos de tres hectáreas en el proceso de erradicación manual de la coca, financiando programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Los campesinos aceptaron los llamados “pactos sociales”, bajo la amenaza de nuevas fumigaciones en caso de no reducirse drásticamente el área destinada a los cultivos ilícitos. El primero de ellos se firma en el corregimiento de Santana, Puerto Asís, el 2 de diciembre del 2000. Actualmente están en vigor 35 nuevos pactos entre el gobierno y las comunidades, de los que se benefician unas 35.000 familias (Witness for Peace, 2001).

A través de los “pactos sociales”, el gobierno se compromete a proveer a cada familia firmante 2 millones de pesos en especie, por concepto de seguridad alimentaria, además de asistencia técnica y ayuda financiera y de infraestructura para generar proyectos de desarrollo alternativo, tras la sustitución de los cultivos de coca. Por otro lado, el compromiso de la comunidad es la erradicación total de la coca durante los 12 meses posteriores a la

suscripción de los acuerdos y no volver a sembrarla. La financiación de estos proyectos de desarrollo alternativo corre por cuenta del PLANTE, que encarga a diferentes ONG’s de la distribución de las ayudas. Además, la comunidad internacional brinda apoyo económico a los Pactos a través de distintas agencias, como USAID¹⁹.

La experiencia de los pactos sociales de erradicación de coca entre el gobierno y las comunidades para evitar la fumigación, también ha sido un fracaso. La ayuda gubernamental de 2 millones de pesos por concepto de seguridad alimenticia prometida a los campesinos, no ha llegado en su totalidad. Y crece la desconfianza de los campesinos en un gobierno del que dicen ha incumplido sus compromisos²⁰.

Además, la intensiva campaña de fumigación ha puesto en peligro el desarrollo de incipientes cultivos alternativos (palmitos, frutas tropicales, cultivos piscícolas), que rodeados de inmensas plantaciones de coca se han visto afectados por el daño colateral que aparejan los herbicidas empleados en las aspersiones aéreas.

Las secuelas previsibles para el medio ambiente han sido desastrosas: contaminación de las fuentes de agua, destrucción de cosechas de alimentos (maíz, yuca, plátano), muerte del ganado y esterilidad en

19. Una descripción del programa de desarrollo alternativo en Colombia planteado por USAID, se puede encontrar en <http://www.mindefensa.gov.co>.

20. Esta desconfianza se remonta a 1996 cuando, tras la firma de acuerdos similares, el gobierno desató una agresiva campaña de fumigación que dio origen al paro cocalero y a las marchas campesinas del Putumayo

general de las tierras fumigadas (Podur, J., 2001). Por si esto fuera poco, la salud de los pobladores del Putumayo también se ha visto afectada. Tras las fumigaciones los médicos del aérea han informado sobre el tratamiento de numerosos casos de pacientes intoxicados por el consumo de agua y alimentos contaminados (Leech, G., 2001). La patología que presentan las víctimas de las fumigaciones, sobretudo los niños, se describen a continuación: náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, ahogo, ansiedad, convulsiones, hipertermia, daños en el hígado y en el sistema renal, irritación y enrojecimiento de ojos y problemas dermatológicos (García y Mejía, 2001).

Cada vez son más las voces que se unen en la petición de una revisión integral de las actuales políticas contra las drogas que, centradas en reducir la oferta a través de la principal estrategia de la fumigación, se han mostrado inútiles. El modelo represivo no funciona. Un vistazo al panorama de los cultivos ilícitos así lo demuestra. La situación es hoy peor que hace una década. Los cultivos han aumentado y se han desplazado, alimentando así el círculo vicioso de la deforestación y de la degradación ambiental. Además, las fumigaciones han afectado al campesino cultivador, una población que sufre todo el peso de una guerra contra las drogas que

deja inmune el resto de los eslabones de la cadena del narcotráfico, donde realmente se rentabiliza el negocio. “Mientras persistan los niveles actuales de consumo mundial de cocaína y otras sustancias psicoactivas, los esfuerzos en Colombia serán inútiles”²¹. Las fumigaciones han resultado incompatibles con los proyectos de desarrollo alternativo. El llamado Plan Alterno, diseñado por los gobernadores del sur de Colombia (Putumayo, Nariño, Cauca y Tolima), como alternativa al Plan Colombia, defiende la suspensión de las fumigaciones y la erradicación manual de cultivos de coca y amapola: “estamos en contra del componente militar del Plan Colombia, nuestro Plan alterno es un plan integral que responde a las necesidades de educación, salud y desarrollo alternativo; para ello necesitamos un compromiso de la Comunidad Internacional que garantice la salida al comercio de nuestros productos”, comenta el Taita Floro Tunubalá, Gobernador del Cauca y líder de la iniciativa.

6. CONCLUSIONES

Las pretensiones de la administración Pastora para la construcción de una nueva Colombia, han caído en “saco roto”. Los principales compromisos adquiridos en el inicial y efímero Plan Nacional de Desa-

21. Restrepo, M., Declaraciones de la Directora del PLANTE al Tiempo en el marco del “Seminario sobre la Lucha contra los Cultivos Ilícitos”, celebrado en Bogotá en julio del 2002.

rrrollo, han fracasado en su conclusión: la economía colombiana atraviesa en la actualidad una de las peores crisis de su historia, agudizada por la crisis mundial, que desde 1999 presentan los mercados financieros. La paz, considerada desde los inicios de la administración Pastrana como su principal bandera política, está muerta desde comienzos del 2002, por la falta de voluntad política de las partes en la solución del conflicto más antiguo de América Latina, así como por la influencia directa que la lucha mundial contra el terrorismo -iniciada por Estados Unidos a finales del 2001- ha tenido sobre el débil proceso de paz colombiano.

El Plan Colombia, surgido en virtud de un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, sustituyó al Plan de Desarrollo, propuesto inicialmente, y se convirtió en la principal orientación de las ejecutorias de la administración Pastrana. Puso en entredicho la autonomía colombiana a la hora de programar políticas nacionales para la solución de los problemas del país. La inserción de Colombia en la actual fase de la globalización se acomete de nuevo desde la perspectiva de la subordinación de los intereses nacionales a las directrices hegemónicas de las potencias, y al costo de sus propios intereses.

El haber considerado la fumigación forzosa junto a la disminución sostenible de la producción, bajo las estrategias de incautación y erradicación, criminalizando a los consumidores y a los productores mediante incautaciones en los

centros de ingreso de los principales mercados, y erradicando las plantas que sirven al procesamiento, condujo a esa lógica de éxito y fracaso, donde siguen entrando drogas ilegales a los mercados que la demandan. Se ha logrado erradicar como nunca antes, pero los cultivos se han multiplicado y expandido.

Además existe una grave crisis de las estrategias. Las áreas cultivadas obran con independencia de las acciones de fuerza que sobre ellas se producen. No se puede hablar de éxito en el programa peruano, cuando se halla amparado en esquemas de corrupción administrativa. La fumigación aérea en Colombia es el vehículo de la militarización de las áreas cocaleras bajo control de los grupos al margen de la ley. Hay desde el Consenso Washington un tono triunfalista cuando se trata de ejecutar la Iniciativa Andina, con respecto a modificar las estructuras militares de la región andino amazónica y del caribe con Centroamérica, luego del proceso post-Panamá. La fumigación es sinónimo de encubrir el fracaso de la política de reducción de la oferta. La difícil situación de la separación de criterios sobre el tamaño de los cultivos, que los transforma en extensivos, atraviesa zonas de conflicto y arremete las posibilidades de un proceso de paz; además de no permitir regionalizar y sí homogenizar la siembra en el ámbito nacional, sin dar claridad a una estrategia integral. Porque el desarrollo alternativo es parte de una estrategia antidrogas.

En Colombia la guerra contra las

drogas ha desconocido las consideraciones históricas, económicas, culturales y sociales del fenómeno. La principal política de erradicación, la fumigación, ha sido un fracaso. A pesar que desde las últimas administraciones colombianas se ha aumentado el área de cultivos fumigados, situándose en 250 mil, el área actual de cultivo supera las 160 mil hectáreas, con dos graves consecuencias: el aumento de la degradación ambiental y del desplazamiento de la población campesina de las regiones afectadas.

Según un documento suscrito por un grupo de periodistas e intelectuales nacionales e extranjeros, entre los efectos colaterales de la actual versión de la guerra contra las drogas se encuentran el desarrollo de organizaciones criminales internacionales, la degradación del conflicto interno, la expansión de cultivos a países vecinos y el desbordamiento de la crisis colombiana, además se desconocen otras posibles alternativas a la solución del problema mundial del narcotráfico (El Tiempo, 4 de agosto, 2002).

Entre las propuestas: abrir y convocar un amplio debate nacional sobre el fenómeno del narcotráfico y el diseño de políticas tendentes a la “reducción del daño” en los eslabones de la producción (poniendo fin a la fumigación, y profundizando en el desarrollo alternativo, con un compromiso de la Comunidad Internacional en la apertura de sus mercados a los productos sustituidos). En el eslabón de la distribución, se propone hacer énfasis

en los programas de interdicción aérea y marítima y compromisos internacionales para intervenir los mercados de precursores químicos, lavado de activos y tráfico de armas. En cuanto al consumo, se debe hacer de la prevención la matriz de la política de la lucha contra las drogas, financiando programas de rehabilitación de toxicómanos acompañados de campañas masivas de educación y difusión sobre los efectos de los usos de las drogas.

BIBLIOGRAFIA

- Borrero, C., 2000, “A propósito del Plan Colombia: El imperio Contraataca”, en <http://www.cinep.org.co>.
- Carvajal, L., 2000, “Paz y Política Exterior: Entre la Intervención y la Cooperación”, en *OASIS*, CIPE- Universidad Externado de Colombia, pág. 300.
- CINER, 2000, Banco de Datos de Derechos Humanos, en *Revista Cien Días*, Vol. 10, No.47, septiembre-noviembre.
- Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento -CODHES-, 2001, *Desplazamiento Forzado: Conflicto, Paz y Desarrollo*., CODHES, Bogotá
- Defensoría del Pueblo, 2001, *Los Cultivos Ilícitos*, Defensoría del Pueblo, Bogotá.
- Díaz-Callejas, A., 1997, “Nueva Hegemonía: Unilateralismo y “Certificación”: Colombia bajo el “Garrote del Imperio”, en <http://www.apolinardiaz.org>.
- Díaz-Callejas, A., 1999, “Colombia: Violencia, Crisis e Intervención Estadounidense”, en *Le*

- Monde Diplomatique*, Edición Mexicana, Año 2, No.26.
- Dirección Nacional de Estupefacientes, 1995, *Plan Nacional de Lucha contra Las Drogas*, Presidencia de la República.
- Departamento de Estado de Estados Unidos, 2002, *Destacan Fondos para la Región Andina*, Programas de Información Internacional.
- DEPAZ, 1998, "El proceso de Negociación del Gobierno Colombiano con las FARC-EP", en *Documentos de Trabajo por la Paz*, DEPAZ, Bogotá.
- Desde Abajo, 1999, *Plan Colombia: Plan for Peace, Prosperity, and the Strengthening of the State*, Desde Abajo, Bogotá.
- Echandía, C., 1999, "El conflicto armado en Colombia: las condiciones objetivas al accionar estratégico de los actores" en *OASIS*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- El Tiempo, Diálogos: los Momentos Clave, 21 de enero de 2002, pág. 1-5, Bogotá.
- El Tiempo, 4 de agosto, 2002, pág. 1-14, Bogotá.
- Fernández, J.A., 1999, "Colombia, ¿hacia el fin de cien años de guerra?", en *Política Exterior*, Vol. XIII No.42, Madrid.
- García, C., y Mejía, N., 2001, "El impacto de las Fumigaciones Aéreas", en Estrada, J., *Plan Colombia: Ensayos Críticos*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- García Durán, M., 2000, "Las negociaciones de paz: Más allá de la coyuntura", en <http://www.cinep.org.co>.
- García Peña, D., 1999, "El proceso de paz colombiano", Institute for National Strategies Studies", en <http://www.ndu.edu/inss/books>.
- Gómez, S., julio 17 de 2002, *El Tiempo*, Bogotá, pág. 1-8.
- Isacson, A., 16 Junio 2001, ponencia presentada en *Escuela superior de Administración Pública*, Bogotá. Adam Isacson es Oficial de Programas del Centro para las Políticas Internacionales con sede en Washington, EEUU.
- Isacson, A., y Vaicius, I., 2001 *El Punto Cero del Plan Colombia*, Reporte del viaje de CIP al Putumayo, Colombia, Center for International Policy (<http://www.ciponline.org>).
- Leech, G., 2001, "Death Falls from the Sky", publicado en <http://thirdworldtraveller.com>.
- McCaffrey, B., 2000, Declaración del Zar Antidrogas divulgada por la Oficina de Programas de Información Internacional, Departamento de Estado de los EEUU, enero 2000.
- Observatorio para los Derechos Humanos en Colombia, "Cronología del Proceso de Paz", en <http://www.rdh.gov.co>.
- Pérez F., G., 2000, "Potencia Europea", en *Caja de Herramientas*, julio, Bogotá.
- Podur, J., 2001, "Fumigación y algo peor en Colombia", publicado en <http://www.zmag.org>.
- Presidencia de la República, 1999, "Plan Nacional de Desarrollo. Cambio para Construir la Paz", http://www.dnp.gov.co/01_CON/PO-LITICA/PLAN.
- Romero, M., A., 2001, "La nueva internacionalización del conflicto y los procesos de paz", en Estrada, J., *El Plan Colombia: ensayos Críticos*, Universidad nacional de Colombia.
- Roy, J., 2001, "Europa y el Plan Colombia: el doble discurso de la UE", en *Política Exterior*, No. 83, Madrid.
- Serrano, P., 2002, "EEUU reconoce que el Plan Colombia se destina a la lucha contrainsurgente", en <http://www.rebellion.org>.

- Tickner, A. B., 2001, "La Guerra contra las drogas: las Relaciones Colombia-Estados Unidos durante la Administración Pastrana", en Estrada, J., *El Plan Colombia: Ensayos Críticos*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Tickner, A.B., 2002, "Colombia es lo que los actores estatales hacen de ella: una (re)lectura de la política exterior colombiana hacia los Estados Unidos", ponencia presentada en FESCOL, Bogotá, mayo.
- Vargas, A., 2001, "Los efectos sobre la guerra y la paz" en Estrada, J., *El Plan Colombia: Ensayos Críticos*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
- Vargas, R. (b), 2001, "Europa y el Plan Colombia: crónica de un compromiso incómodo" en TNI Publications, <http://www.tni.org>
- Vicepresidencia de la República de Colombia, 2000, Panorama del Putumayo, Presidencia de la República (<http://www.rdh.gov.co>).
- Villamizar, D., 2002, "Debates de Paz, Acciones de Guerra", en Observatorio de Conflictos, Capítulo Colombia, <http://www.cip.fuhem.es/observatorio>,
- Witness for Peace, 2001, "Deadly Fumigation Returns to Putumayo", en <http://www.ciponline.org>
- <http://www.dnp.gov.co>
- <http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/>
- <http://www.globalexchange.org>
- <http://www.mindefensa.gov.co>